

Recurso de revisión en materia de derecho de acceso a información pública

Comisionada ponente:

María del Carmen Nava Polina

Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Expediente: RR.IP.5242/2019

CARÁTULA

Expediente	RR.IP. 5242/2019	
Comisionada Ponente: MCNP	Pleno: 19 de febrero de 2020	Sentido: SOBRESEER por quedar sin materia
Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	Folio de solicitud: 6000000308119	
¿Qué solicitó la persona entonces solicitante?	El particular requirió al sujeto obligado recurrido, la versión pública de las resoluciones recaídas en tres tocas, así como de una sentencia de primera instancia, por cese de estado de interdicción.	
¿Qué respondió el sujeto obligado?	En su respuesta, el sujeto obligado indicó que la sentencia del cese de estado de interdicción ya había sido superada y se encuentra corriendo el término para la interposición del juicio de garantías; asimismo, indicó que dos de las sentencia de tocas se encuentran en juicio de amparo; por lo que la información de estos tres se encuentra reservada, exhibiendo prueba de daño. Finalmente, pone a disposición del particular, la copia simple de la versión pública de la sentencia que no fue reservada, mediante entrega gratuita en el domicilio de la Unidad de Transparencia	
¿En qué consistió el agravio de la persona ahora recurrente?	Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando como agravio la clasificación de la información en la modalidad reservada.	
¿Qué se determina en esta resolución?	Se SOBRESEE el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por haber quedado sin materia.	

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020.

VISTAS las constancias para resolver el expediente **RR. IP.5242/2019**, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta.

ÍNDICE

ANTECEDENTES	2
CONSIDERACIONES	19
PRIMERA. Competencia	19
SEGUNDA. Procedencia	19
Resolutivos	30

ANTECEDENTES

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 21 de octubre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 6000000308119, mediante la cual requirió:

“A través del presente escrito, con el debido respeto y con base al artículo 6 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerzo ante usted mi derecho de acceso a la información. Además con fundamento en el artículo 180, 193, 196 y 199 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México solicito:

1. Descripción de la información solicitada:
 - a. La versión publica de la sentencia de las tocas de las apelaciones 489/2019 y 490/2019, localizada en la sala cuarta familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, turnadas al ponente Dr. Antonio Muñozcano Eternod,

- Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del TSJCDMX, mismo que resolvió las tocas antes solicitadas en fecha 30 de septiembre de 2019.
- También solicito la sentencia en versión pública del toca 1540/2018 localizada en la sala cuarta familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, turnadas al ponente Dr. Antonio Muñozcano Eternod, Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del TSJCDMX, resuelto en fecha 26 de octubre de 2018.
 - Finalmente, solicito al Juez Segundo de Proceso Oral Familiar, Eduardo García Ramírez, la versión sentencia en versión pública del expediente de Cese de Estado de interdicción con el número de expediente 774/2017, resuelta en fecha 17 de enero de 2019.
- Medio para recibir la información: Solicito que dicha información sea otorgada por medio del **correo electrónico** antes mencionado.
 - Modalidad de entrega de la información: digital (electrónica)

Estas sentencias fueron mencionadas en la conferencia “Análisis de la Constitucionalidad de la Figura del Estado de Interdicción en el Juicio de la Sentencia de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México Toca Número 1540/2019. Como constancia de lo anterior se adjunta la imagen que fue publicada para la conferencia.

martes 08 de octubre de 2019	miércoles 09 de octubre de 2019
<p>Hora: 10:30</p> <p>SESIÓN INAUGURAL:</p> <p>Dr. Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.</p> <p>Sr. Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</p> <p>Dra. Amalia Eva Gamio Ríos, Representante de México en Ginebra como Miembro del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.</p> <p>Lic. Ismael Esquivel Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.</p> <p>Dra. María Servent Bravo-Ahuja, Directora General de la Organización Civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C.</p> <p>Dr. Jorge Martínez Arreguín, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.</p>	<p>Hora: 11:30</p> <p>CONFERENCIA: CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. UN CAMBIO DE PARADIGMA.</p> <p>PONENTES: Sr. Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</p> <p>Dra. Amalia Eva Gamio Ríos, Representante de México en Ginebra como Miembro del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.</p> <p>MODERADORA: Mtra. Eva Verónica de Gyves Zárate, Magistrada Integrante de la Comisión Judicial en materia de Género e Integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.</p> <p>Hora: 13:30</p> <p>MESA DE ANÁLISIS Y DEBATE: CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EN PARTICULAR EL ART. 12 Y 13 DE LA CONVENCIÓN.</p> <p>PONENTE: Dr. Carlos Parra Dussan, Miembro del Comité de Seguimiento de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (2015-2018)</p> <p>MODERADOR: Mtra. Celia Marín Sasaki, Magistrada Integrante de la Comisión Judicial en materia de Género e Integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.</p>
	<p>Hora: 10:00</p> <p>CONFERENCIA: RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DESDE LA PRÁCTICA JUDICIAL.</p> <p>PONENTE: Dr. Edwin Bejar Rojas, Magistrado del Tercer Juzgado de Familia del Cusco-Perú.</p> <p>MODERADORA: Mtra. Rebeca Florentina Pujol Rosas, Magistrada Integrante de la Comisión Judicial en materia de Género y en la Comisión de Derechos Humanos e Integrante de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.</p> <p>Hora: 12:00</p> <p>MESA DE ANÁLISIS Y DEBATE: INTERDICCIÓN Y CAPACIDAD JURÍDICA.</p> <p>PONENTES: Lic. Elard Ricardo Bolaños Salazar, Abogado de Perú.</p> <p>MODERADORA: Mtra. Josefina Rosey González, Magistrada Integrante de la Comisión Judicial en materia de Género e Integrante de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.</p>
	<p>Hora: 14:00</p> <p>CONFERENCIA: ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA FIGURA DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN EN EL JUICIO DE LA SENTENCIA DE LA CUARTA SALA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOCA NÚMERO 1540/2018.</p> <p>PONENTES: Dr. Antonio Muñoz Cano Eternod, Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.</p> <p>MODERADORA: Mtra. Ivette M. Negrete García, Presidenta de la Consolidación Internacional de Abogados.</p>

...” (Sic).

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para recibir notificaciones “Por internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”.

II. Respuesta del sujeto obligado. El 13 de noviembre de 2019, previa ampliación de plazo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio número P/DUT/8256/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual, en su parte sustantiva, informó lo siguiente:

“Una vez hecha la gestión correspondiente ante el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, éste se pronunció en el siguiente sentido:

“... Dado que en el expediente 774/2017, a la fecha en que se dicta el presente auto se encuentra transcurriendo el término para interponer el juicio de garantías, en contra de la resolución dictada por la H. Cuarta Sala de lo Familiar en fecha treinta de septiembre del año en curso, lo anterior de conformidad con el sello del Boletín Judicial de dicho fallo, siendo preciso manifestar que la sentencia de la cual se pide la versión pública, ya se encuentra superada por el fallo dictado por la Superioridad, de ahí que cualquier información relacionada con el mismo es reservada, en virtud de que la sentencia dictada por la H. Cuarta Sala de lo Familiar de este Tribunal aún puede ser modificada mediante el Amparo. ----- Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones XXV, XXXIV, 174, 183 Y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece a continuación la siguiente PRUEBA DE DAÑO: ----- FUENTE DE INFORMACIÓN: Expediente 774/2017. -----

HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: -----

----- “Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: --- VI. Afecté los derechos del debido proceso; -----

----- VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;” (Sic) ----- INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales de las partes, ya que el expediente del que se requiere la información se encuentra en trámite. -----

PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad del expediente 774/2017 que se tramita ante el Juzgado 2° de Proceso Oral Familiar. -----

--- PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. -----

AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA: Juzgado 2° de Proceso Oral Familiar.” (Sic) -----

Por otra parte, una vez hecha la gestión correspondiente ante la Cuarta Sala Familiar, ésta se pronunció en el siguiente sentido, respecto de las sentencias correspondientes a los tocas 489/2019 y 490/2019:

“... En el proceso derivado del juicio Nulidad de Declaración de Estado de Interdicción y/o Cese de Interdicción de ATANACIO VAZQUEZ PABLO, MARÍA LUISA VAZQUEZ MELITÓN y ARMANDO JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ relativo a los Tocas 489/2019 y 490/2019, se interpuso un juicio de amparo directo ante esta Sala. Por tanto, la información relativa al mencionado proceso Nulidad de Declaración de Estado de Interdicción y/o Cese de Interdicción de ATANACIO VAZQUEZ PABLO, MARÍA LUISA VAZQUEZ MELITÓN y ARMANDO JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ relativo a los Tocas 489/2019 y 490/2019 -, constituye información reservada. En este sentido, de acuerdo con los artículos 6, fracciones XXV y XXXIV; 174, 183 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece a continuación la siguiente prueba de daño: -----

----- FUENTE DE INFORMACIÓN: Actuaciones de los diversos Tocas 489/2019 y 490/2019 y su respectivo cuaderno de amparo. -----

----- HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen lo siguiente: ----

----- “Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: ---- VI. Afecte los derechos del debido proceso; ----- VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; ...” -----

----- INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales tanto de la parte actora como de la parte demandada, ya que en este caso, el proceso que involucra el expediente de referencia, no ha sido resuelto en definitiva, dado que fue promovido un amparo contra la sentencia dictada en el mismo. Amparo que se encuentra pendiente de resolver por el Poder Judicial Federal. En otras palabras, los Tocas en cuestión no cuenta con sentencia definitiva que haya causado estado, por lo que se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 citado. Además, de divulgarse información de dicho Toca, se generaría una ventaja personal indebida, en perjuicio de las partes involucradas, supuesto que se indica en la fracción VI del mencionado artículo 183, al afectar los derechos del debido proceso, en perjuicio de las mismas. -----

----- PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad de las constancias que integran el expediente materia de la solicitud. -----

----- PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.” (Sic) -----

Por último, hecha también la gestión correspondiente ante la Cuarta Sala Familiar, ésta se pronunció en el siguiente sentido, respecto de la sentencia correspondientes al toca 1540/2018:

“...Por último, le remito copia simple de la sentencia dictada en el cuaderno del Toca 1540/2018...” (Sic) -----

En consecuencia, DEBIDO A QUE FUE CLASIFICADA COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA CONTENIDA EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 774/2017, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PROCESO

ORAL FAMILIAR; ASÍ COMO LA CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS TOCAS 489/2019 Y 490/2019, CORRESPONDIENTES AL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA FAMILIAR; ADEMÁS DE QUE DICHA SALA CLASIFICÓ COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DIVERSOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA 1540/2018, PARA EFECTO DE UNA VERSIÓN PÚBLICA, por lo tanto, esta Unidad de Transparencia, con fundamento en los artículos 6 fracciones VI y XLII, 90 fracción II, 93 fracción X, 173 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sometió dichas clasificaciones a consideración del Comité de Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y pronunciamiento respectivo. En este sentido, se notifica a usted el contenido del ACUERDO 04 - CTTSJCDMX- 50 - E/2019, emitido en la quincuagésima sesión extraordinaria de 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente:

“VII.- Del análisis a la solicitud que ocupa, así como del pronunciamiento emitido por el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, respecto de la reserva de la sentencia dictada en el expediente 774/2017, se procede a realizar las siguientes consideraciones: -----

----- La sentencia dictada en el expediente 774/2017, materia de la presente solicitud, aún no ha adquirido la definitividad necesaria para que su contenido pueda ser susceptible de divulgarse a través de una versión pública. -----

----- Por consiguiente, la sentencia del expediente en cuestión, TODAVÍA NO HA SIDO DECLARADA JUDICIALMENTE COMO EJECUTORIADA, por lo que la misma puede ser impugnada y, por tanto, modificada o revocada. -----

-----Al respecto, el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente, indica lo siguiente: -----

----- “Artículo 427.- Causan ejecutoria por declaración judicial: -----

----- I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial; -----

----- II. Las sentencias de que hecha notificación en forma no se interpone recurso en el término señalado por la ley; y -----

----- III. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos legales, o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial.” (Sic) -----

----- En este caso, la sentencia dictada en el expediente 774/2017, correspondiente al índice del Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, no ha sido declarada judicialmente por éste como ejecutoriada, tal como dispone la fracción II del artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles referido, que a la letra indica: -----

----- “Artículo 428.- En los casos a que se refiere la fracción I del artículo anterior, el juez de oficio hará la declaración correspondiente. En el caso de la fracción II, la declaración se hará de oficio o a petición de parte, previa la certificación correspondiente de la Secretaría. Si hubiere deserción o desistimiento del recurso, la declaración la hará el tribunal o el juez, en su caso.” (Sic) -----

----- Por tanto, la sentencia de referencia, a la fecha de ingreso de la solicitud y de respuesta por parte del Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, aún es susceptible de ser recurrida, por encontrarse transcurriendo el plazo legal para tal efecto. -----

----- Así entonces, a falta de la declaración judicial de ejecutoriedad de la sentencia del expediente en cuestión, éste se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia citada, por lo que todavía no es permisible elaborarse del mismo una versión pública. -----

----- Asimismo, con relación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción VI, efectivamente, para el caso de llevar a cabo la divulgación de la información contenida en la sentencia de referencia, dicha acción podría generar una

ventaja personal indebida en perjuicio de las partes involucradas, además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una real, imparcial, pronta y completa impartición de justicia, ya que, como se ha explicado, la sentencia requerida aún no han sido declarada por el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar como ejecutoriada, y por ende, todavía no cuenta con una definitividad que la dé por concluida. Así entonces, dar a conocer el contenido de la misma, afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso, entendiéndose por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder perturbar o interferir legalmente en los derechos de las personas; mismo que es considerado como un derecho humano, el cual se encuentra consagrado específicamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como se transgrediría también el derecho humano a una administración e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, reconocido en el artículo 17 de la propia Constitución General. -----

----- En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida, a la esfera de derechos de las personas involucradas en el juicio correspondiente al expediente 774/2017, correspondiente al índice del Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, ES MAYOR QUE EL INTERÉS DE CONOCERLA. -----

----- VIII.- Por otra parte, del análisis a la solicitud que ocupa, así como del pronunciamiento emitido por la Cuarta Sala Familiar, respecto de la reserva de las sentencias dictadas en los tocas 489/2019 y 490/2019, se procede a realizar las siguientes consideraciones: ----- Las sentencias dictadas en los tocas 489/2019 y 490/2019, correspondientes al índice de la Cuarta Sala Familiar, AÚN SON SUSCEPTIBLES DE SER MODIFICADAS, REVOCADAS O CONFIRMADAS, DEBIDO AL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LAS MISMAS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. -----

----- Por tanto, dado que dichas sentencias se encuentran sub júdices, se ubican entonces en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 citado, y en este sentido, CUALQUIER INFORMACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DE LA MISMAS, ES RESERVADA. -----

----- En consecuencia, no se puede otorgar acceso a las mencionadas sentencias, al actualizarse la hipótesis de excepción establecidas en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: -----

----- “Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: --- VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; ...” (Sic) -----

----- Del mismo modo, con relación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción VI, efectivamente, para el caso de llevar a cabo la entrega de la información que requiere el peticionario, ésta podría generar una ventaja personal indebida, en perjuicio de las personas involucradas en el juicio familiar, además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una correcta, imparcial, pronta y real impartición de justicia, ya que, como se ha explicado, se trata de sentencias que no han sido resueltas definitivamente, debido al amparo promovido en contra de las mismas. En consecuencia, divulgar el contenido de tales sentencias permitiría a personas ajenas a los señalados tocas, enterarse de las condiciones establecidas en éstos, generando con ello un perjuicio en contra de las partes y de la propia impartición de justicia, lo cual afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso en el juicio, entendiéndose por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para interferir legalmente en los derechos de las personas; mismo que es considerado

como un derecho humano, el cual se encuentra consagrado específicamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como se transgrediría también el derecho humano a una administración e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, reconocido en el artículo 17 de la propia Constitución General. -----

----- En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida, a la esfera de derechos de las personas involucradas en los tocas 489/2019 y 490/2019, radicados en la Cuarta Sala Familiar, ES MAYOR QUE EL INTERÉS DE CONOCERLA. ----- IX.- Resulta conveniente destacar que la substanciación del amparo en contra de los tocas 489/2019 y 490/2019, correspondientes al índice de la Cuarta Sala Familiar, trasciende también al expediente principal 774/2017, correspondiente al índice del Segundo Juzgado de Proceso Oral Familiar. -----

----- Por tanto, la sentencia del expediente 774/2017 es reservable también, de conformidad con las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que no es definitiva ni ha causado estado, debido a que aún puede ser modificado, revocado o confirmado su sentido, por obra de dicho amparo. -----

-----X.- Por último, en cuanto al pronunciamiento emitido por la Cuarta Sala Familiar, así como de la entrega, en copias simples, de la sentencia dictada en el toca 1540/2018, se procede a realizar las siguientes consideraciones: -----

Que las copias remitidas contienen datos personales, consistentes en los nombres de la parte actora, el de su abogada, el de su tutriz y el de su curador, además el de una perito, así como descripciones de la vida privada y de la vida íntima de la parte actora. -----

----- En este sentido, los datos mencionados deben suprimirse, ya que asocian a la parte actora con información jurisdiccional de índole privada, la cual, por mandato legal, no debe divulgarse de ningún modo, aunque fuera requerida por la peticionaria, ya que pondría en riesgo diversos bienes jurídicos vinculados con las esferas exclusivas e íntimas de la parte de referencia. -----

----- Inclusive, divulgar la información confidencial requerida por la peticionaria, representaría una acción prohibida por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuya consecuencia traería una sanción, tal y como lo establece el artículo 127, fracción III, de la citada Ley, que establece: ----- “Artículo 127. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes: ----- ...III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; ...” (Sic) -----

----- En consecuencia, los datos personales señalados deben protegerse por ser confidenciales, de conformidad con los artículos 6, inciso A) fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, fracciones XXII y XXIII, 7, párrafo segundo; 8, 21, 24, fracciones VIII, XXIII y XXIV; 186, párrafos primero y segundo; y 191, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Así como los artículos 3, párrafo IX, 9, numerales 2, 3, 7 y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Artículos que, en su orden, indican lo siguiente: ----- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: -----

----- “Artículo 6. -----

----- A) Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por

los siguientes principios y bases: -----
----- ...II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.” ----- “Artículo 16... -----
----- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.” -----
----- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: -----
----- “Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: ----- ... XXII. Información Confidencial. A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente Ley. -----
----- XXIII. Información Clasificada. A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial.” -----
----- “Artículo 7. -----
----- ...La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular.” -----
----- “Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. ----- (...)
----- Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. ----- (...)
----- Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: -----
----- (...)
----- VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; ----- (...)
----- XXIII. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable; y ----- (...)
----- XXIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable; -----
----- “Artículo 186. Se considera información confidencial a la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. -----
----- La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.” -----

-----“Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.” ----- Así como los artículos 3, párrafo IX; y 9, numerales 2, 3, 7 y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que disponen: ---

----- “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: -----
-----... IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona;” -----

----- “Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios de: ...2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.

----- 3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica informada e inequívoca por la que el titular acepta, mediante declaración o acción afirmativa, el tratamiento de sus datos personales. -----

----- ...7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, engaño o medios fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del titular. -----

-----8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, previo consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal aplicable al sujeto obligado; en este caso, los datos personales recabados u obtenidos se tratarán por los medios previstos en el presente ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. ----- Además, se han testado datos

confidenciales, de conformidad con el artículo 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, consistentes en: -----

----- “I. Identificación: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos; -----

-----...V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho; ...” (Sic) -----

----- Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, inciso A), fracción II; y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones XXII y XXIII, 7, párrafo segundo; 21, 24, fracciones VIII, XXIII y XXIV; 186, párrafos primero y segundo; y 191, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 3, párrafo IX, 9, numerales 2, 3, 7 y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; además del artículo 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así como en los artículos 4, fracciones II, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXXIII, XL, XLIV; 8, fracciones II, IX y XII; 10, fracciones I y X; 34, 35, 41, 50 y 51, del

Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, DETERMINA: -----

----- PRIMERO. - CONFIRMAR LA RESERVA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 774/2017, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PROCESO ORAL FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. -----

----- SEGUNDO. - CONFIRMAR LA RESERVA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS TOCAS 489/2019 y 490/2019, RESPECTIVAMENTE; CORRESPONDIENTES AL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. -----

----- TERCERO. - CONFIRMAR LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA 1540/2018, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. -----

----- CUARTO. - APROBAR LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA 1540/2018, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. ---- QUINTO. - SE CONCEDE AL SOLICITANTE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN VERSIÓN PÚBLICA, DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA 1540/2018, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. -----

----- SEXTO. - SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, TURNE EL PRESENTE ACUERDO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NOTIFIQUE A LA SOLICITANTE, EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 206, 212, 230 Y 231 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS NUMERALES PRIMERO, PÁRRAFO SEGUNDO Y SEGUNDO, FRACCIÓN LXI; QUINTO, CUADRAGÉSIMO, CUADRAGÉSIMO QUINTO Y SEXAGÉSIMO SEGUNDO; DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; ASI COMO EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.----- SÉPTIMO. - SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, PARA QUE COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE PROCESO ORAL FAMILIAR, ASI COMO AL TITULAR DE LA CUARTA SALA FAMILIAR, A FIN DE DAR Estricto CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (Sic) -----

En este caso, atendiendo a que desea el acceso a la información por medio “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de la materia, se comunica el cambio de modalidad en la entrega de información, toda vez que la misma no puede ser proporcionada en la forma requerida, en virtud que el formato en que se encuentra la

sentencia dictada en el TOCA 1540/2018, proporcionada por la Cuarta Sala Familiar es el IMPRESO, CONSTANTE EN 13 FOJAS POR AMBAS CARAS.

De lo anteriormente transcrito se desprende que, en principio, Usted puede elegir la modalidad en que desea la información, siempre y cuando ello no implique procesamiento de la misma, ni que se presente conforme al interés particular del solicitante.

Procesamiento que se actualiza al realizarse una interpretación armónica de los artículos 7 y 219, respectivamente de la Ley de Transparencia, ya que para brindarle la información requerida habría que digitalizarla para ajustarla en la modalidad indicada, esto es, transformarla en archivos electrónicos, como lo es el PDF; una acción a la que no se encuentra obligado este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto es, a realizar actividades que no se hallan contempladas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Para mayor ilustración, a continuación, se transcribe lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica:

“Artículo 7. ... Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega.” (sic)

Asimismo, se transcribe el contenido del artículo 219 de la mencionada Ley de Transparencia, que señala lo siguiente: “Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información”.

Por lo que, en razón de lo anteriormente expuesto, si usted desea copia simple de la sentencia de dicho toca, la misma se le entregará GRATUITAMENTE en el domicilio de esta Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Niños Héroes Número 132, Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información.

Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al artículo cuadragésimo cuarto de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se comunica a usted, que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, puede presentar un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la

Ciudad de México, en apego a los artículos 233, 234, 235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de ellas, derivadas de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.

(sic)

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 5 de diciembre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo siguiente:

“VI. Razones o motivos de inconformidad:

Primero. La respuesta brindada no tomó en consideración las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la reserva de la información, así como omitió aplicar los principios de Máxima Publicidad y pro persona en la emisión de dicha respuesta.

La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidió reservar la información concerniente a los expedientes 489/2019 y 490/2019, así como el expediente 774/2017, previamente citados, ya que, de acuerdo a dicho sujeto obligado, la sentencia del expediente 774/2017 se encuentra superada por el fallo dictado por la Superioridad, de ahí que cualquier información relacionada con el mismo es reservada, en virtud de que la sentencia dictada por la H. Cuarta Sala de lo Familiar de este Tribunal aún puede ser modificada mediante el Amparo, mientras que la sentencia de los tocas 489 y 490/2019 no está firme, pues, se interpuso un juicio de amparo directo ante esta Sala. Por tanto, la información relativa al "mencionado proceso Nulidad de Declaración de Estado de Interdicción y/o Cese de Interdicción de ATANACIO VAZQUEZ PABLO, MARÍA LUISA VAZQUEZ MELITÓN y ARMANDO JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ relativo a los Tocas 489/2019 y 490/2019 -, constituye información reservada" [sic].

La reserva de la información en comento se fundamentó en las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sin embargo, el sujeto obligado en este caso, no tuvo en cuenta lo establecido en la Ley General de Transparencia, ley aplicable a todos los sujetos obligados a nivel federal y local, respecto a las obligaciones generales de transparencia ni tampoco tuvo en cuenta el principio de Máxima Publicidad al determinar la reserva de la información. La Ley General de Transparencia establece en su artículo 70 fracción XXXVI que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, en los medios electrónicos las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, y el art 73 de la misma ley establece que los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público.²

Las sentencias solicitadas constituyen información de interés público, ya que de acuerdo al artículo 5 fracción XXIV de la Ley General de Transparencia, se considera como información de interés público a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no

simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

Las versiones públicas de las sentencias solicitadas resultan útiles para que el público, la sociedad civil y las personas con discapacidad, puedan conocer los criterios que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia de interdicción, derechos de personas con discapacidad, derecho a la igualdad y no discriminación, así como los criterios emitidos sobre la constitucionalidad del estado de interdicción, debido a la trascendencia e importancia que gira en torno al tema de interdicción y la capacidad jurídica de personas con discapacidad.

Tanto así que las versiones públicas de dichas sentencias fueron divulgadas el 9 de octubre en el foro "La capacidad jurídica en la impartición de justicia en la Ciudad de México" realizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la conferencia "Análisis de la Constitucionalidad de la Figura del Estado de Interdicción en el Juicio de la Sentencia de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México Toca Número 1540/2018" (adjunto al presente escrito como anexo 1), como se señaló en la solicitud de información, además del seminario "Sobre criterios de igualdad y no discriminación" en la sesión "Criterios sobre discapacidad" llevada a cabo el 3 de octubre, organizada por el Poder Judicial de la CDMX y COPRED (adjunto al presente como anexo 2).

Es así que en dichos eventos se difundió el contenido de la sentencia de las tocas 489/2019 y 490/2019 de la Carta Sala Familiar, relacionadas íntimamente con la sentencia del expediente 774/2017 del Juez Segundo Oral Familiar, debido a la trascendencia e importancia que gira en torno al tema de interdicción y la capacidad jurídica de personas con discapacidad.

Por otra parte, respecto a los supuestos en los que podrá reservarse la clasificación de la información, la Ley General de Transparencia, en su artículo 113, fracción X y XI, establece que podrá reservarse aquella información que afecte los derechos del debido proceso, así como vulneren la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

En el mismo sentido, la Ley de Transparencia de esta entidad establece en su artículo 183 fracciones VI y VII, podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;

Estas dos leyes son aplicables al presente caso, ya que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley General de Transparencia, esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Sin embargo, la Ley de Transparencia la Ciudad de México contiene supuestos más restrictivos que los contenidos en la Ley General de Transparencia, ya que para clasificar como reservada la información solicitada, la Ley General requiere que se afecten los derechos del debido proceso, o se vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado', mientras que la Ley local establece que se reservara toda la información de los expedientes judiciales mientras la sentencia no haya causado ejecutoria.

Es decir, la Ley General requiere demostrar que, de publicarse la información de un expediente, puede vulnerarse su conducción o los derechos al debido proceso, mientras que la Ley local faculta a los sujetos obligados a reservar toda la información de todos los expedientes judiciales, mientras no causen estado, sin importar que afecten al procedimiento o afecten al debido proceso.

La reserva de la información bajo los preceptos anteriormente citados constituye una violación al principio de máxima publicidad' y al principio pro personas, ya que, de acuerdo a este principios, debió de aplicarse la norma más protectora o menos restrictiva a los derechos del solicitante, además, la la información solicitada tiene que ser pública, completa, oportuna y accesible.

La Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia debió aplicar la Ley General de Transparencia en el presente caso, ya que es la ley que transgrede en menor medida mi esfera jurídica, al reservarse la información solo cuando se vulnere la conducción de los expedientes judiciales mientras no hayan causado estado.

En el mismo sentido, la publicación de la sentencias en versión publica no vulnera la conducción de los expedientes judiciales, ya que el testado de los datos personales contenidos en dicho expediente impide un uso inadecuado de dichos datos que pueda afectar el procedimiento. Además, como previamente fue referido, autoridades adscritas al propio TSJCDMX dieron publicidad a estas sentencias en la conferencia y seminario previamente referidos, por lo que es posible presuponer que la divulgación de esta información no vulnera la conducción del expediente judicial.

Aunado al punto anterior, el sujeto obligado ya reveló los nombres de las partes actoras en el presente juicio en la foja 2 de la respuesta a la solicitud de fecha 13 noviembre de 2019, por lo que, al haberse dado dicha información confidencial, no existe motivo para reservar la información.

En síntesis, el sujeto obligado debió de aplicar los principios de máxima publicidad y pro persona para aplicar la Ley General de Transparencia y otorgar las versiones públicas de las sentencias solicitadas, ya que estas sentencias constituyen información de interés público.

Segundo: El sujeto obligado no tomó en consideración lo establecido en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas', para aplicar la prueba del daño al reservar la información solicitada.

El proceso de clasificación que siguió el sujeto obligado fue fundado y motivado bajo los supuestos de las fracciones VI y VII del artículo 183 previsto en la Ley de Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de la Ciudad de México, por lo cual, para la procedencia de reserva de la información, realizó una prueba de daño consistente en:

De los tocas 489 y 490 y su respectivo cuaderno de amparo, manifestó que el interés que se busca proteger son: los derechos procesales de ambas partes, ya que el expediente referido no ha sido resuelto en definitiva, pues se promovió amparo contra la sentencia dictada, por lo que se encuentra pendiente de resolver. Por ello no hay sentencia que haya causado estado respecto a las tocas 489 y 490, y de publicar la información de estas generaría un perjuicio para las partes involucradas en el proceso.

Por lo anterior, se entiende que al clasificar la información como reservada, sólo tomó en consideración la Ley local. Sin embargo, debió estudiar también los criterios de la Ley General y en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, lo cual debió atender al realizar la prueba de daño.

La Ley General de Transparencia, en su artículo 104, establece que en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En el mismo sentido, la Ley de Transparencia local establece en su artículo 174 que en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar los mismos puntos que

en la Ley General. Sin embargo, en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en el punto Trigésimo Tercero establece que la clasificación de la información deberá:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculandola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate; IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.'

En la respuesta, la autoridad sí cumple con el requisito de la fracción I al señalar que se actualiza lo dispuesto en las fracciones X y XI del artículo 113 de la Ley General. Sin embargo, incumple con lo contenido en las fracciones II, III, IV, V y VI.

La ponderación⁸ a la que se refiere la fracción II, no se actualiza al sólo examinar las desventajas que significa hacer pública la información (perjuicio al debido proceso y la conducción de expedientes) sino también se requiere analizar las ventajas que de la misma resultan y sopesar las ventajas contra las desventajas.

Respecto a la fracción III, el sujeto obligado respondió que el interés protegido corresponde a derechos procesales de la parte actora y de la parte demandada, es decir, el derecho al debido proceso. Pero no acredita el vínculo entre la difusión de la información con la afectación al interés protegido, pues no especifica qué afectación concreta se actualizaría si se concedieran las versiones públicas solicitadas, además, es importante insistir en que la información ya fue publicada por los entes obligados y ello nunca fue advertido en la prueba de daño.

En cuanto a la fracción IV, no cumple con este requisito al no decir y no demostrar como se afecta a las partes con la emisión de una sentencia en versión pública, es decir, no prueba que existan casos donde la emisión de una versión pública perjudique los derechos de las partes, más si se considera que tales versiones no contiene datos personales que hagan identificables a las partes.

Aún más, entre los motivos que expresó la Cuarta Sala Familiar para negar el acceso a la información no dice cómo se va a dar el daño, cuando se va a materializar si va a ser con la emisión de la sentencia en versión pública o con un acto posterior, es decir no acredita la fracción V.

Por último en cuanto a la fracción VI, no justifica que la reserva de información sea la medida menos restrictiva para garantizar el derecho de acceso a la información o que sea la forma adecuada, siendo que la misma la Cuarta Sala Familiar dio a conocer el contenido de la sentencia que resolvió las tocas 489/2019 y 490/2019, mediante la publicación de los resolutivos primero, segundo y sexto, reservando los nombres completos que constituyen datos personales en la conferencia referida con anterioridad. Anexo al presente escrito, fotos digitales de las diapositivas expuestas en dicha conferencia como ANEXO 3

En esta conferencia, el magistrado ponente fue quien dictó la sentencia de las tocas referidas. Por ello, las circunstancias en las que lo hizo demuestran que el ya dio a conocer la sentencia al público y que su discusión es de interés general.

Por lo anterior, en términos del artículo 247 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, solicito al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estudie si el sujeto obligado incurrió en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en dicha Ley y demás aplicables en la materia, así como haga del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. Esto, pues si se considera que la información es clasificada, entonces no debió ser discutida en foros públicos.

Interés público

Tanto en la Ley Local como en la Ley General de la materia se menciona el concepto de información de interés público la cual es definida como la información relevante o beneficiosa para la sociedad debido a que su divulgación es útil para comprender las actividades que realizan los sujetos obligados.

En el artículo séptimo de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, establece que características deben tener en cuenta los sujetos obligados para considerar una información de interés público:

I. Que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir, que en posesión de particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y contribuya a mejorar su calidad de vida;

II. Que su divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y comprendan las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, y

III. Que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas a la sociedad y contribuya al combate a la corrupción.

Al respecto, la autoridad sólo se enfocó en la Ley local para decretar la restricción de la información, sin tomar en cuenta otros instrumentos jurídicos.

Atendiendo a los puntos anteriores la sentencia es de interés público porque versa sobre un tema de interés general como es el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la restricción que el estado de interdicción impone al ejercicio de la misma, violando así derechos reconocidos en tratados internacionales como lo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.” (Sic)

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 11 de diciembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos.

V. Manifestaciones y alegatos. El 27 de enero de 2020, el sujeto obligado ingresó en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio número P/DUT/0790/2020, de misma fecha, signado por el Director de la Unidad de Transparencia, por medio del cual expresa la legalidad de la respuesta emitida, indicando que el proporcionar los nombres de las partes no representa que la sentencia sea pública, toda vez que esa información se encuentra pública en todo momento; asimismo remite a manera de diligencias para mejor proveer, copia de boletines en los cuales consta la información de los expedientes que se publica, concerniente a los datos del nombre de las partes y número de expediente.

VI. Ampliación. El 10 de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad del caso.

VII. Cierre de instrucción. El 17 de febrero de 2020, se dio cuenta de las autorizaciones presentadas por la persona recurrente en fecha 11 de febrero, así como el correo electrónico enviado por el sujeto obligado a esta Ponencia y al correo de la particular, por el cual remiten una respuesta complementaria mediante el oficio P/DUT/1336/2020 de misma fecha, por el que adjuntan la versión testada del Acta de la Quincuagésima Sesión Extraordinaria del año 2019. Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 7, apartado D y 49 de la *Constitución Política de la Ciudad de México*, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la *Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México*; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del *Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México*.

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación:

a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes.

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 122/99 **IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA¹**

En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez que el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente:

·Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

...
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o
..."

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos el sujeto obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, comprobando la emisión de la misma al correo electrónico del particular.

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, como se revisará en las siguientes líneas:

¹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común)

Tenemos que la persona recurrente se duele toda vez que la clasificación de la información no le genera certeza jurídica, por lo que mediante respuesta complementaria, el sujeto obligado proporciona el Acta No. CTTSJCDMX/50-E/2019, emitida en la Quincuagésima Sesión Extraordinaria, celebrada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, en fecha 13 de noviembre de 2019; por medio de la cual se clasifica la información referente a las sentencias dictadas en los tocos de apelación 489/2019 y 490/2019, así como de la sentencia dictada en el expediente 774/2019. Por ello resulta pertinente traer a colación lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes artículos:

**“TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
Capítulo I**

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 100. *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.*

Artículo 101. *Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:*

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años.

(...)

Artículo 103. *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

Artículo 104. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Artículo 105. *Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.*

Artículo 106. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

Artículo 108. *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. *Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

Artículo 111. *Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

Capítulo II

De la Información Reservada

Artículo 113. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*
(...)

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

(...)

Artículo 114. *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”*

La clasificación de la información en la modalidad de reserva, solo se puede dar dentro de los supuestos plasmados en la norma, atendiendo que para los concerniente a procedimientos judiciales, existen dos hipótesis de reserva, cuando se afecte al debido proceso o cuando se vulnere la conducción de los expedientes judicial.

De lo anterior, los sujetos obligados deben tener en cuenta que las excepciones al acceso a la información deben ser utilizadas de forma limitada y en la menor medida de lo posible, puesto que es una restricción del derecho humano aquí protegido, por lo que se debe perfeccionar la procedencia de esta limitación, con la prueba de daño en la que exprese el alcance demostrable y comprobable del perjuicio específico y particular que ocasionaría la exposición de la información.

En concatenación con lo anterior, nuestra Ley local de Transparencia en los artículos 183 y 184 establecen los supuestos jurídicos en los que se fundamentarán las reservas de información en cuanto a procedimientos judiciales, que a la letra dicen lo siguiente:

***“Capítulo II
De la Información Reservada***

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
(...)

VI. Afecte los derechos del debido proceso;

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;
(...)

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”

Los artículos 183 y 184, se transcriben por su relevancia con el tema que nos ocupa, toda vez que, si bien busca proteger el debido proceso y el sano desarrollo de los procesos judiciales, se advierte una diferencia en cuanto a la redacción, con la Ley General, toda vez que en el ámbito nacional se instruye a que la información no pueda ser disponible si afecta la conducción de los expedientes, hasta que cause estado y, en lo local, instruye a que no se revele la información de los expedientes hasta que la sentencia haya causado ejecutoria, no obstante los mismos no se contraponen, puesto que ambos protegen el mismo interés jurídico de no causar una ventaja indebida a una de las partes o exponer a los sujetos del proceso a escarnio público; asimismo, ambos limitan esa restricción a fundamentos y motivaciones especiales para cada caso en concreto.

Es así, que el sujeto obligado, al momento de realizar la reserva de las sentencias solicitadas, bajo el argumento que aún no han causado estado, puesto que los casos se encuentran en juicio de amparo y la sentencia se encuentra corriendo el plazo para interponer el juicio de garantías; por lo que exhibe su prueba de daño, la cual para su análisis se vuelve a transcribir:

“PRUEBA DE DAÑO: -----

FUENTE DE INFORMACIÓN: Expediente **774/2017**. -----

HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: -----

“Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: -
VI. Afecté los derechos del debido proceso; -----

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;” (Sic) -----

INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales de las partes, ya que el expediente del que se requiere la información se encuentra en trámite. -----

-----PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad del expediente 774/2017 que se tramita ante el Juzgado 2° de Proceso Oral Familiar. -----

PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. -----

----- AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA: Juzgado 2° de Proceso Oral Familiar.” (Sic) -----

prueba de daño: -----

FUENTE DE INFORMACIÓN: Actuaciones de los diversos **Tocas 489/2019 y 490/2019** y su respectivo cuaderno de amparo. -----

HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen lo siguiente: -----

“Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: - VI. Afecte los derechos del debido proceso; -----

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; ...” -----

INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales tanto de la parte actora como de la parte demandada, ya que en este caso, el proceso que involucra el expediente de referencia, no ha sido resuelto en definitiva, dado que fue promovido un amparo contra la sentencia dictada en el mismo. Amparo que se encuentra pendiente de resolver por el Poder Judicial Federal. En otras palabras, los Tocas en cuestión no cuenta con sentencia definitiva que haya causado estado, por lo que se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 citado. Además, de divulgarse información de dicho Toca, se generaría una ventaja personal indebida, en perjuicio de las partes involucradas, supuesto que se indica en la fracción VI del mencionado artículo 183, al afectar los derechos del debido proceso, en perjuicio de las mismas.

PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad de las constancias que integran el expediente materia de la solicitud. -----

PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.

(...)

Así entonces, a falta de la declaración judicial de ejecutoriedad de la sentencia del expediente en cuestión, éste se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia citada, por lo que todavía no es permisible elaborarse del mismo una versión pública. -----

----- Asimismo, con relación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción VI, efectivamente, para el caso de llevar a cabo **la divulgación de la información contenida en la sentencia de referencia, dicha acción podría generar una ventaja personal indebida en perjuicio de las partes involucradas, además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una real, imparcial, pronta y completa impartición de justicia**, ya que, como se ha explicado, la sentencia requerida aún no han sido declarada por el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar como ejecutoriada, y por ende, todavía no cuenta con una definitividad que la dé por concluida. Así entonces, **dar a conocer el contenido de la misma, afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso, entendiéndose por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder perturbar o interferir legalmente en los derechos de las personas**; mismo que es considerado como un derecho humano, el cual se encuentra consagrado específicamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como **se transgrediría también el derecho humano a una administración e impartición de justicia pronta, completa e imparcial**, reconocido en

el artículo 17 de la propia Constitución General. -----

En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida, a la esfera de derechos de las personas involucradas en el juicio correspondiente al expediente 774/2017, correspondiente al índice del Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, ES MAYOR QUE EL INTERÉS DE CONOCERLA. -----

----- VIII.- Por otra parte, del análisis a la solicitud que ocupa, así como del pronunciamiento emitido por la Cuarta Sala Familiar, respecto de la reserva de las sentencias dictadas en los tocas 489/2019 y 490/2019, se procede a realizar las siguientes consideraciones: ----- Las sentencias dictadas en los tocas 489/2019 y 490/2019, correspondientes al índice de la Cuarta Sala Familiar, AÚN SON SUSCEPTIBLES DE SER MODIFICADAS, REVOCADAS O CONFIRMADAS, DEBIDO AL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LAS MISMAS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ----- Por tanto,

dado que dichas sentencias se encuentran sub júdices, se ubican entonces en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 citado, y en este sentido, CUALQUIER INFORMACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DE LA MISMAS, ES RESERVADA. -----

----- En consecuencia, no se puede otorgar acceso a las mencionadas sentencias, al actualizarse la hipótesis de excepción establecidas en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: -----

----- “Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: --- VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; ...” (Sic) -----

----- Del mismo modo, con relación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción VI, efectivamente, para el caso de llevar a cabo la entrega de la información que requiere el peticionario, ésta podría generar una ventaja personal indebida, en perjuicio de las personas involucradas en el juicio familiar, además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una correcta, imparcial, pronta y real impartición de justicia, ya que, como se ha explicado, se trata de sentencias que no han sido resueltas definitivamente, debido al amparo promovido en contra de las mismas. En consecuencia, divulgar el contenido de tales sentencias permitiría a personas ajenas a los señalados tocas, enterarse de las condiciones establecidas en éstos, generando con ello un perjuicio en contra de las partes y de la propia impartición de justicia, lo cual afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso en el juicio, entendiéndose por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para interferir legalmente en los derechos de las personas; mismo que es considerado como un derecho humano, el cual se encuentra consagrado específicamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como se transgrediría también el derecho humano a una administración e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, reconocido en el artículo 17 de la propia Constitución General. -----

En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida, a la esfera de derechos de las personas involucradas en los tocas 489/2019 y 490/2019, radicados en la Cuarta Sala Familiar, ES MAYOR QUE EL INTERÉS DE CONOCERLA. ----- IX.-

Resulta conveniente destacar que la substanciación del amparo en contra de los tocas 489/2019 y 490/2019, correspondientes al índice de la Cuarta Sala Familiar, trasciende también al expediente principal 774/2017, correspondiente al índice del Segundo Juzgado

de Proceso Oral Familiar. -----
----- Por tanto, la sentencia del expediente 774/2017 es reservable también, de conformidad con las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que no es definitiva ni ha causado estado, debido a que aún puede ser modificado, revocado o confirmado su sentido, por obra de dicho amparo. -----
-----X.- Por último, en cuanto al pronunciamiento emitido por la Cuarta Sala Familiar, así como de la entrega, en copias simples, de la sentencia dictada en el toca 1540/2018, se procede a realizar las siguientes consideraciones: -----
Que las copias remitidas contienen datos personales, consistentes en los nombres de la parte actora, el de su abogada, el de su tutriz y el de su curador, además el de una perito, así como descripciones de la vida privada y de la vida íntima de la parte actora. -----
----- En este sentido, los datos mencionados deben suprimirse, ya que asocian a la parte actora con información jurisdiccional de índole privada, la cual, por mandato legal, no debe divulgarse de ningún modo, aunque fuera requerida por la peticionaria, ya que pondría en riesgo diversos bienes jurídicos vinculados con las esferas exclusivas e íntimas de la parte de referencia. -----
----- Inclusive, divulgar la información confidencial requerida por la peticionaria, representaría una acción prohibida por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuya consecuencia traería una sanción," (Sic)

Vemos que la clasificación de la sentencia 774/2017, de los tocas 489/2019 y 490/2019, encuentran su fundamento en las hipótesis de reserva previstas en las fracciones VI y VII del artículo 183 de nuestra Ley local, bajo el argumento que el interés que se protege son los derechos procesales de las partes, toda vez que aún no han sido resueltos en definitiva, por lo que las sentencias no han causado estado.

De la prueba de daño, se desprende que el sujeto obligado acredita que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que ésta podría generar una ventaja personal indebida, en perjuicio de las personas involucradas en el juicio familiar, además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una correcta, imparcial, pronta y real impartición de justicia. Esto es así, ya que las sentencias no han sido resueltas definitivamente, debido al amparo promovido en contra de las mismas. En consecuencia, divulgar el contenido de tales sentencias permitiría a personas ajenas, enterarse de las condiciones establecidas en ellas,

generando con ello un perjuicio en contra de las partes y de la propia impartición de justicia, lo cual afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso en el juicio, entendiéndose por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para interferir legalmente en los derechos de las personas.

Es así que el riesgo de perjuicio al divulgar la información es mayor al interés público de conocerlo, puesto que se trata de temas sensibles al tocar esferas íntimas de las personas, como lo son la condición física y/o mental de quienes intervienen en el juicio, es así que el proporcionar información parcial de un juicio puede crear una percepción social, de una condición que aún no queda firme.

Por lo que tenemos que la prueba de daño propuesta por el sujeto obligado, se funda en los presupuestos jurídicos bajo los cuales se establece el riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que indica que se generaría una ventaja indebida en perjuicio de las personas involucradas; así mismo exterioriza que el divulgar la información impida una correcta, imparcial, pronta y real impartición de justicia.

El sujeto obligado indica que es mayor el riesgo de perjuicio ante la divulgación que el interés público general de conocerla, acreditando los alcances que pueda tener la difusión de las sentencias en perjuicio de alguna de las partes.

Ahora bien, tenemos que la respuesta primigenia ha quedado perfeccionada con la complementaria, toda vez que se complementa la información con el acta emitida por el Comité de Transparencia, el cual contiene los razonamientos por los cuales se llegó a la conclusión de la pertinencia de la reserva de la información, generando así certeza jurídica en este Órgano Garante para mantener la clasificación hecha por el sujeto obligado.

Por lo que claramente, el sujeto obligado actuó de conformidad a los principios de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del recurrente, **ya que subsanó la inconformidad del recurrente al proporcionar el instrumento jurídico por el cual se realizó la clasificación de información.**

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente las inconformidades expresadas por el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación correspondiente, **de fecha catorce de febrero de 2020** en el medio señalado por el recurrente para tales efectos (correo electrónico).

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:

- a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos controvertidos por el recurrente.
- b) Al existir constancia de notificación a la recurrente del **catorce de febrero de 2020**, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo electrónico).

En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por la persona recurrente, atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO²**.

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se **SOBRESEE** el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por haber quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se **SOBRESEE** el presente medio de impugnación por quedar sin materia.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

² Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado.

Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San Martín Reboloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

HJRT/JFBC/NYRH

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO